Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente conformado con motivo del Recurso de Revisión **03716/INFOEM/IP/RR/2024, 03717/INFOEM/IP/RR/2024 y 03718/INFOEM/IP/RR/2024, acumulados**, interpuestos por **XXXXXXXXXXX**, en adelante, Recurrente o Particular, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, **Secretaría de Finanzas,** a las solicitudes de acceso a la información 00379/SF/IP/2024, 00364/SF/IP/2024 y 00363/SF/IP/2024 se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

# A N T E C E D E N T E S

## I. Presentación de la solicitud

Con fecha tres y cuatro de junio de dos mil veinticuatro, el Particular presentó tres solicitudes de acceso a la información pública a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), ante la Secretaría de Finanzas, en los siguientes términos:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Solicitud*** | ***DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA*** |
| 00379/SF/IP/2024 | *COPIA SIMPLE DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, DIRECCIONES DE ÁREA Y SUBDIRECCIONES. Y COPIA SIMPLE DE LA RESPUESTA QUE SE HA EMITIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA A DICHAS AUDITORIAS. ESTATUS EN QUE SE ENCUENTRAN.* (Sic) |
| 00364/SF/IP/2024 | *Copia simple de las respuestas a las auditorías realizadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2024, a la subsecretaría de Tesorería y sus unidades administrativas que forman parte de la misma. Oficios, respuestas, actas y/o similares que correspondan a la auditoría.* (Sic) |
| 00363/SF/IP/2024 | *Copia simple de las respuestas a las auditorías realizadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023, a la subsecretaría de Tesorería y sus unidades administrativas que forman parte de la misma. Oficios, respuestas, actas y/o similares que correspondan a la auditoría*. (Sic) |

En las tres solicitudes de información se definió como modalidad de entrega a través del SAIMEX.

## II. Respuesta del Sujeto Obligado

Con fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado notificó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, a través de lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud** | Respuesta |
| 00379/SF/IP/2024 | El Director General de Tesorería se declaró la incompetencia señalando que el Sujeto Obligado con atribuciones para conocer lo relativo a las auditorías era la Secretaría de la Contraloría, por lo que la documentación soporte solicitado se encuentra en poder del Órgano Fiscalizador que llevó a cabo la auditoria. Por lo que hace a las auditorías en proceso solicitó sean clasificadas |
| 00364/SF/IP/2024 | El Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico Financiero refirió la incompetencia señalando que el Sujeto Obligado con atribuciones para conocer lo relativo a las auditorías era la Secretaría de la Contraloría |
| 00363/SF/IP/2024 | El Director General de Tesorería declaró la incompetencia señalando que el Sujeto Obligado con atribuciones para conocer lo relativo a las auditorías era la Secretaría de la Contraloría, por lo que la documentación soporte solicitado se encontraba en poder del Órgano Fiscalizador que llevó a cabo la auditoria. |

## IV. Interposición del Recurso de Revisión

Con fecha dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, se recibieron en este Instituto, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), tres Recursos de Revisión interpuestos por la parte Recurrente, en contra de las respuestas del Sujeto Obligado, a la solicitud de información, en los siguientes términos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOLICITUD | “ACTO IMPUGNADO” | “RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD” |
| 00379/SF/IP/2024 | *“QUE RESPUESTA TAN ABSURDA Y CON FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL SUJETO OBLIGADO. Las auditorías realizadas deberán formar parte de los archivos del Sujeto Obligado, dado que no sólo se proporcionará la información que se genera, también la información que se conoce en ámbito de sus funciones y atribuciones. Así mismo no clasifican con carácter de reservado las auditorías en proceso ni orientan cuál es el supuesto sujeto obligado que contiene la información. Por ello pido me entreguen copia de las auditorías realizadas”* (Sic) | *“No proporcionan la información solicitada”* |
| 00363/SF/IP/2024 | *“RESPUESTA”* | *“No se entrega la información requerida, dado que emiten respuesta de manera absurda sin transparentar la respuesta que han entregado a las auditorías,”* |
| 00364/SF/IP/2024 | *“RESPUESTA”* | *“No se entrega la información requerida, dado que emiten respuesta de manera absurda sin transparentar la respuesta que han entregado a las auditorías,”* |

V. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto

**a) Turno del Medio de Impugnación.** El dieciocho e junio de dos mil veinticuatro, el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), asignó los números de expedientes **03716/INFOEM/IP/RR/2024**, **03717/INFOEM/IP/RR/2024 y 03718/INFOEM/IP/RR/2024** a los medios de impugnación que nos ocupan, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y los turnó a los Comisionados Ponente Luis Gustavo Parra Noriega, Sharon Cristina Morales Martínez y María Del Rosario Mejía Ayala, para los efectos del artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión del Recurso de Revisión.** El dieciocho y veintiuno de junio, de dos mil veinticuatro, se acordó la admisión de los Recursos de Revisión interpuestos por el Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual fue notificado a las partes el once de dicho mes y año, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado.** El dos de julio de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado rindió sus informes justificados donde ratificó su respuesta.

**d) Ampliación de plazo para resolver.** El veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, el Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acordó ampliar por un periodo de quince días hábiles, el plazo para resolver los Recursos de Revisión que nos ocupan; acto que fue notificado a las partes, mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos el año pasado dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. **Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “**TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO**.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO**.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**e) Acumulación de los asuntos.** El  veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, durante su Vigésima Tercera Sesión Ordinaria, con el propósito de privilegiar la resolución expedita y evitar resoluciones contradictorias, con fundamento en el artículo 18 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, según lo previsto en su artículo 195, **acordó** la acumulación del Recurso de Revisión **03717/INFOEM/IP/RR/2024 y 03718/INFOEM/IP/RR/2024** al diverso **03716/INFOEM/IP/RR/2024,** por ser este último el más antiguo, sustanciado bajo el índice de esta Ponencia, al advertir conexidad entre estos, ya que fueron promovidos por la misma persona, en los que se señaló como Sujeto Obligado recurrido la Secretaría de Finanzas**.**

**f) Cierre de instrucción.** El quince de octubre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acto que fue notificado a las partes, mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), el mismo día.

En razón de que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

# C O N S I D E R A N D O S

## PRIMERO. Competencia

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento

De las constancias que forma parte del Recurso de Revisión que se analiza, se advierte que previo al estudio del fondo de la *litis*, es necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda.

**Causales de improcedencia**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, ya que estas deben estudiarse, aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Lo anterior se robustece en la Tesis de Jurisprudencia: 1a./J. 163/2005(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 2006, página 319), toda vez que, si de las constancias que obran en el expediente electrónico, se actualiza una causal de improcedencia establecidas en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dará lugar a que el presente Recurso de Revisión sea sobreseído.

En el presente caso, **no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia** establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; no se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo, aunado a que el medio de impugnación fue presentado en tiempo.

Asimismo, se actualiza la causal de procedencia del Recurso de Revisión señalada en el artículo 179, fracción IV y II, de la Ley en cita, pues la Recurrente se inconformó de la incompetencia manifestada y la clasificación de información.

**Causales de sobreseimiento.**

Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

El artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte, el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza algún supuesto de sobreseimiento; lo anterior, en virtud de que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que el Recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado o bien, haya quedado sin materia.

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.

## TERCERO. Determinación de la Controversia

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el Recurrente requirió acceder a los documentos siguientes:

* Las auditorias realizadas a la Dirección General de Tesorería, y sus Direcciones de Área y Subdirecciones, así como, las respuestas emitidas por dichas áreas y el estatus en que se encontraban.
* La respuesta emitida por la Subsecretaría de Tesorería y sus unidades administrativas, a las auditorías realizadas a dichas áreas, del primero de octubre de dos mil veintitrés al treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro; así como, los oficios, actas, o similares que correspondan a la auditoría.

En respuesta, el Sujeto Obligado a través del Director General de Tesorería y el Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico Financiero, declaró la incompetencia de la Secretaría de Finanzas señalando que el Sujeto Obligado con atribuciones para conocer lo relativo a las auditorías era la Secretaría de la Contraloría; por lo que hace a las auditorías en proceso solicitó fueran clasificadas; ante dicha respuesta, el Particular se inconformó de la incompetencia manifestada y la clasificación de la información, manifestando que las auditorías realizadas deberán formar parte de los archivos del Sujeto Obligado, dado que no sólo se proporcionará la información que se genera, también la información que se conoce en ámbito de sus funciones y atribuciones. Así mismo se inconformó porque no se clasificaron como reservadas las auditorías en proceso, lo cual actualiza los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 179, fracciones II y IV de la Ley de trasparencia local. Así las cosas, una vez admitido y notificado el Recurso de Revisión a las partes, el Sujeto Obligado ratificó su respuesta.

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en los expedientes de referencia, materia de la presente resolución, consistente en: la solicitud de acceso a la información; la respuesta del Sujeto Obligado; el escrito recursal y el Informe Justificado; instrumentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

## CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública

El artículo 6°, Apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su artículo 70, la información que se considera corresponde a las Obligaciones de Transparencia, la cual debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada.

En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

## Quinto. Estudio de Fondo

Expuestas las posturas de las partes, se procede al análisis del agravio hecho valer por el Recurrente, concerniente a la negativa de la información, para lo cual, en principio es necesario contextualizar la solicitud.

Al respecto, el Tercero y Cuarto de los Lineamientos Generales de Auditoría, precisan que una auditoría es un proceso sistemático que fortalece el control interno, enfocado al examen objetivo, independiente y evaluatorio de las operaciones financieras, administrativas y técnicas realizadas; así como a las funciones, objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal.

Además que el objetivo de las auditorías por objeto la vigilancia, fiscalización y control de los resultados de la gestión gubernamental y el ejercicio del gasto público estatal y federal; así como, al control de recursos humanos, financieros, materiales y de servicios, obra pública.

En ese orden de ideas, del Décimo Primero al Décimo Noveno, de los Lineamientos citados, precisan que las Auditorías se dividen en cuatro etapas, a saber, las siguientes:

* **Planeación:** Para cada Auditoría se realizará la planeación conforme al tipo y rubro sujeto auditar, determinando el alcance, objetivo y los procedimientos a realizar, por medio de la elaboración de los siguientes documentos: a) Orden de Auditoría; b) Carta de Planeación; c) Programa Específico; d) Cédula de solicitud de información; y e) Cédula de marcas.
* **Ejecución:** Una vez notificada la Orden de Auditoría, se llevará una reunión la cual dará como resultado el Acta de Inicio de Auditoría y notificará la Cédula de Solicitud de Información. Una vez proporcionada la información y documentación por parte del área Auditada, el Auditor procederá al análisis correspondiente.

El Auditor deberá evaluar que la información y documentación sea pertinente, suficiente, relevante y competente para emitir resultados y en caso de que existan observaciones se registrarán en la cédulas sigueintes:

1. Observaciones al Control Interno e implementación de acciones de mejoras, y
2. Observaciones con presunta falta adminsitrativa.

* **Elaboración del Informe de Auditoría:** Una vez concluidos los procedimientos de Auditoría y suscritas las cédulas de observaciones, se elaborará el Informe de Auditoría, en el cual se establecera el plazo para realizar la aclaración o solventación de las observaciones, así como, las acciones de mejora.
* **Seguimiento:** El Auditor dara seguimiento a las observaciones para verificar si se aclararon, para emitir la cédula de seguimiento donde se precise si se solventaron o no; mientras que por lo que hace a las acciones de mejoras, remitida la información, se analizara con el fin de verificar si se atendieron o no y colocar el resultado en la cédula menciionada.

Finalmente, el TERCERO de los Linemientos Generales de Auditoría, precisan lo siguinte:

* **Acta de inicio de Auditoría:** Documento para hacer constar formalmente el inicio de la Auditoría;
* **Informe de Auditoría:** Documento emitido por autoridad competente, en el que se expresan los resultados obtenidos en el proceso de Auditoría;
* **Observación:** Hallazgos detectados en el desarrollo de la Auditoría que podría constitutir un aspecto susceptible de mejora o el incumplimiento de alguna disposición legal o normativa.

Ahora bien, es necesario precisar que la solicitud de información no es clara en los documentos a los cuales requiere tener acceso, pues requiere la respuesta de determinadas áreas y las auditorías realizadas; por lo que, este Instituto considera en atención al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que la pretensión del Recurrente es obtener:

* El Informe de Auditoría, que contiene la información de los procesos realizados hasta su conclusión y con la cual se da por concluida la Auditoría; esto es, dicho documento da. Cuenta de la realización de una auditoría, pues es un resumen de todo lo sucedido en la Auditoría.
* Los documentos mediante los cuales se solventaron o atedieron las observaciones emitidas en la Auditoría; al ser las expresiones documentales emitidas por la parte auditada, para dar contestación o respuesta a las observaciones, por lo que, son los únicos que darían cuenta de una respuesta.

Cabe precisar que el Particular no señaló el periodo del cual solicitó la información, en el requerimiento informativo número 00379/SF/IP/2024, por lo que se estará a lo establecido en el Criterio de Interpretación, con clave de control SO/003/2019, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala lo siguiente:

*“****Periodo de búsqueda de la información.*** *En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud.”*

Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que la pretensión de la persona Recurrente es obtener el Informe de Auditorías y los documentos mediante los cuales se solventaron o atedieron las observaciones emitidas, a las Auditorías realizadas a las siguientes áreas:

* A la Dirección General de Tesorería, y las áreas que la conforman, del cuatro de junio de dos mil veintitrés al cuatro de junio de dos mil veinticuatro, y
* A la Subsecretaría de Tesorería y las áreas que la conforman, del primero de octubre de dos mil veintitrés al treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.

Establecido lo anterior, en respuesta el Sujeto Obligado señaló que era incompetente para conocer de lo solicitado, al ser la Secretaría de la Contraloría el ente con atribuciones para concer con lo peticionado; sobre el tema, los artículos 49, fracción II, 53, fracción III y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisan que las Unidades de Transparencia son responsables de orientar a los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiera tener la información requerida, **cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud de acceso.**

Asimismo, que los Comités de Transparencia tienen entre sus atribuciones confirmar, modificar o revocar la **declaración de incompetencia** que realicen los titulares de las unidades administrativas.

En esa tesitura, cuando las Unidades de Transparencia determinen **la notoria incompetencia** por parte de los sujetos obligados deberán comunicar al solicitante la misma dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, situación que no fue observada.

Como se logra observar, si bien la Ley de la materia, prevé el supuesto de incompetencia para que los sujetos obligados den atención a solitudes de información, también lo es, que no se precisa en que consiste dicho concepto; sobre dicha situación, según Cabanellas, Guillermo (1993), en el “Diccionario Jurídico Elemental” (p. 32 y 161), precisó los siguientes conceptos:

* **Competencia:** La capacidad de una autoridad para conocer sobre una materia o asunto.
* **Incompetencia:** Falta de Competencia.

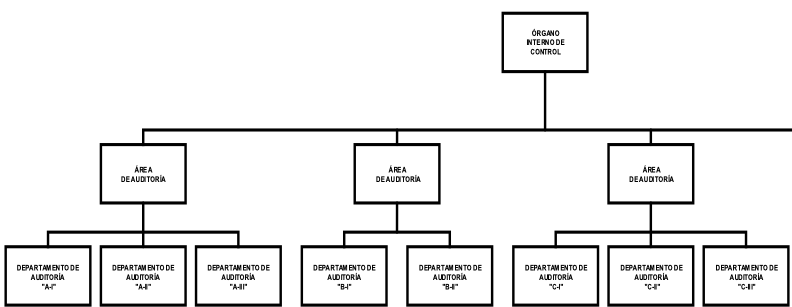
Por lo que, **la incompetencia**, radica en la incapacidad de una autoridad para conocer de un tema o asunto; en el mismo sentido, conviene traer al presente estudio la tesis aislada, con número de registro: 186917, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, Pág. 1243, cuyo texto y rubro es el siguiente:

***“LEGITIMACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LOS TRIBUNALES DE AMPARO, POR ESTAR VINCULADOS CON EL CONCEPTO DE COMPETENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, NO PUEDEN CONOCER DE AQUÉLLA.*** *El artículo*[*16 constitucional*](javascript:AbrirModal(1))*se refiere a la competencia que tienen las autoridades para conocer de determinadas conductas en particular, caso que corresponde a la esfera de atribuciones de las autoridades cuya competencia constituye el análisis del Poder Judicial de la Federación, mas no la forma en que una autoridad fue elegida o integrada, circunstancia que le compete estudiar a la autoridad individual o colegiada que otorgó el nombramiento o, en todo caso, el régimen establecido para ello, porque el precitado artículo constitucional no se refiere a la legitimación de un funcionario, ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa.”*

A mayor abundamiento, resulta necesario traer a colación, el Criterio de interpretación, con número de registro SO/013/2017, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual precisa que la **incompetencia** implica que, de conformidad con las atribuciones conferidas al Sujeto Obligado, no habría razón por la cual éste deba contar con la información solicitada, en cuyo caso, tendría que orientar al particular para que acuda a la instancia competente.

En otro orden de ideas, dicho concepto refiere a la ausencia de atribuciones por parte de los Entes sujetos a las Leyes de Transparencia, para contar con la información que se requiere, es decir, se trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a éste.

Por tanto, a continuación, se analiza si en la especie, el Ente Recurrido cuenta con atribuciones para conocer sobre la información requerida; para lo cual, es necesario traer a colación el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, que precisa que el Sujeto Obligado cuenta con un Órgano Interno de Control y que este a su vez, cuenta con tres Áreas de Auditorias, tal como se muestra a continuación:



En ese orden de ideas, el Manual referido precisa que el Órgano Interno de Control encargada de dirigir la realización de auditorías y acciones de control y evaluación, así como, la emisión del informe correspondiente y comunicar le resultado a las áreas auditadas; así como, promover el seguimiento a las observaciones determinadas, así como, de la solventación y cumplimiento de estas. Para lograr lo anterior, contará con tres Áreas de Auditoría, encargadas de supervisar la ejecución de auditorías, así como, supervisar el seguimiento a la solventación y cumplimiento de las observaciones y acciones de mejora derivadas de las mismas.

Conforme a lo anterior, se logra observar que el área competente para conocer de la información solicitada, es el Órgano Interno de Control del Sujeto Obligado, pues a través de sus áreas practican Auditorías a las unidades adminsitrativas que conforman al Sujeto Obligado.

Al respecto, los artículos 23, fracción XII, 46 y 47, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, establece que para el estudio, planeación y despacho de asuntos, el Titular del Ejecutivo, contará con diversas dependencias, entre las cuales, se encuentra la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, encargada de la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector auxiliar, lo relativo a la presentación de la declaración patrimonial, de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal, así como de la responsabilidad de los servidores públicos; para lograr lo anterior, **tendrá la atribución específica de designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y organismos auxiliares, quiénes dependerán jerárquica y funcionalmente de dicha Secretaría, así como de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades.**

En ese orden de ideas, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, establece lo siguiente:

* **(Artículo 3°, fracción XII):** Los órganos internos de control, son las unidades administrativas en las dependencias y organismos auxiliares, encargadas de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos y que dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría;
* **(Artículo 41):** Los órganos internos de control, así como las Áreas de Auditoría, de Quejas y de Responsabilidades, de las dependencias y organismos auxiliares, serán coordinados y dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría, y
* **(Artículo 42):** Las contralorías mencionadas, constituyen unidades administrativas dentro de la estructura orgánica de las dependencias u organismos auxiliares, en que se encuentran adscritos.

Conforme a la normatividad analizada, se advierte que todas las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado de México, deben de contar con un órgano interno de control, mismo que estará dentro de la estructura orgánica de dichos entes; no obstante, jerárquica y funcionalmente dependerán directamente de la Secretaría de la Contraloría; además, que dichos entes, serán los competentes para realizar Auditorías.

En ese orden de ideas, la Secretaría de Finanzas, al formar parte de la administración pública central, tal como lo precisa el artículo 23, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, cuenta con un Órgano Interno de Control, el cual, si bien se encuentra funcional y jerárquicamente adscrita a la Secretaría de la Contraloría, también lo es que forma parte de la estructura orgánica del Sujeto Obligado y, por lo tanto, forma parte de este.

En otro orden de ideas, el Órgano Interno de Control al estar adscrito a la Secretaría de Finanzas, es una unidad administrativa de esta, en materia de transparencia y, por lo tanto, aún y cuando funcional y jerárquicamente depende de la Secretaría de la Contraloría, es competente para pronunciarse sobre la información solicitada, a través del Ente Recurrido

Lo anterior, se robustece con el Criterio Reiterado 08/24, de la Tercera Época, del Pleno de este Instituto, el cual precisa que los Órganos Internos de Control adscritos a las Dependencias del Poder Ejecutivo, deberá dar respuesta a las solicitudes de información, a través de la Secretaría al que se encuentren adscritos, aún y cuando dependan jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría.

Por lo que, se concluye que el Ente Recurrido es **competente** para conocer de la información solicitada, pues cuenta con un Órgano Interno de Control, que ve todas las cuestiones relacionadas con las Auditorías realizadas a las áreas que conforman a la Secretaría de Finanzas, por lo que, el agravio hecho valer resulta **FUNDADO.**

Conforme a lo anterior y para dar atención al requerimiento de información, se considera que la Secretaría de Finanzas deberá asumir competencia y realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos a efecto de proporcionar la información respecto a las auditorías solicitadas.

Dicha determinación toma sustento, en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los sujetos obligados sólo están constreñidos a proporcionar la información pública que obre en sus archivos, en el estado en que esta se encuentre; por lo que, la entrega no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante, además, que tampoco deberá generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.

De esta manera, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en el que conste la información solicitada, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc; lo cual, toma sustento en el artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual refiere que los sujetos obligados deberán entregar la información que obre en sus archivos.

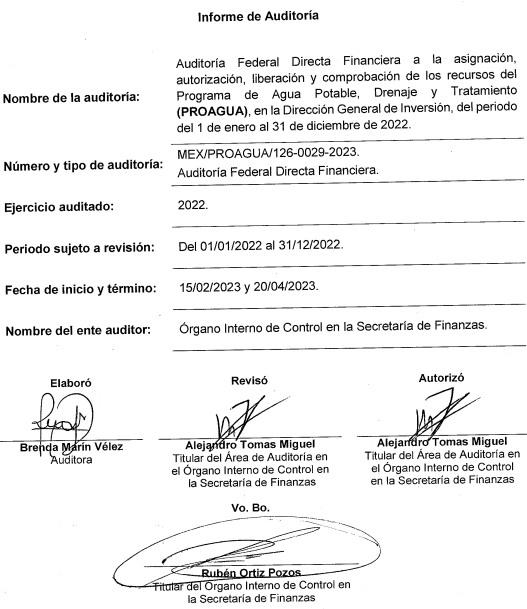
De tales circunstancias, se concluye que los sujetos obligados únicamente se encuentran constreñidos a proporcionar los documentos que den cuenta de la información solicitada, como obren en sus archivos, sin tener que elaborarlos a las necesidades del Recurrente; por lo que, en el presente caso, el Ente Recurrido, deberá entregar la expresión documental requerida, es decir, respecto a las auditorías realizadas durante los periodos solicitados.

Lo anterior, toma relevancia pues este Instituto localizó el Programa Anual de control y Evaluación del ejercicio fiscal dos mil veintitrés y de dos mil veinticuatro, para la Secretaría de Finanzas, de los cuales se logra vislumbrar que durante los dos años mencionados se planearon realizar diversas auditorías, tal como se muestra en los siguientes ejemplos:





Además, que el personal del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas, son los que elaboran, revisan y autorizan los Informes de Auditoría, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:



Así, se concluye que el Sujeto Obligado deberá entregar la información solicitada respecto a las auditorías realizadas a la Dirección General de Tesorería y la Subsecretaría de Tesorería y las áreas que conforman a estas.

Ahora bien, para el caso de que en alguno de los periodos no se haya realizado alguna auditoría a las áreas mencionadas, deberá hacerlo del conocimiento de la parte Recurrente, de manera clara y precisa, en términos del artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto, que, a la fecha de la solicitud, el Sujeto Obligado pudiera contar con auditorías en trámite, por lo que, se procede a especificar las circunstancias que debe acreditar el Sujeto Obligado para actualizar la reserva.

En ese sentido, el artículo 140, fracción V, inciso 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, (homólogo del artículo 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública), prevé lo siguiente:

***“Artículo 140.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes:*

*…*

*V. Aquella cuya divulgación obstruya o pueda causar un serio perjuicio a:*

*1. Las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de las Leyes; o*

*…”*

De dicho precepto normativo se desprende que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación obstruya o cause perjuicio en las actividades de fiscalización, verificación, inspección, comprobación y auditoría sobre el cumplimiento de leyes. Por su parte, los Lineamientos Generales, disponen:

***“Vigésimo cuarto.****De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:*

*I. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;*

*II. Que el procedimiento se encuentre en trámite;*

*III. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y*

*IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes.”*

Del lineamiento en cita, se colige que se trata de información reservada aquella que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos:

1. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes;
2. Que ese procedimiento se encuentre en trámite;
3. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y
4. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el proceso de verificación del cumplimiento de las leyes.

En ese contexto, de la interpretación de la causal de reserva en análisis, este Instituto estima que consiste en proteger la oportunidad de la autoridad verificadora de realizar las acciones materiales de fiscalización, sin que el sujeto verificado pueda alterar o modificar el escenario, objeto o circunstancias materia de fiscalización.

Es decir, con dicha causal de reserva se procura permitir que las autoridades realicen las labores de verificación, inspección o auditoría del cumplimiento de las leyes, en su circunstancia natural, sin que el sujeto verificado, o bien, personas ajenas, puedan influir en el resultado, modificando los hechos, actos u omisiones a fiscalizar.

Conforme a lo anterior, se considera que el Sujeto Obligado para actualizar la causal de reserva establecida en el artículo 140, fracción V, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, deberá desarrollar su prueba de daño específica, en donde además deberá acreditar la existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, en trámite; así como, que la documentación solicitada tenga una vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación y su difusión impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia; por lo que, en el caso, de no acreditar los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales, no podrá reservar la documentación.

Conforme a lo anterior, para el caso de que existan auditorías en trámite que actualicen la causal de reserva referida, el Sujeto Obligado deberá desarrollar una prueba de daño específica, acreditando las circunstancias analizadas por este Instituto, para lo cual, deberá tomar en cuenta lo establecido en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que las causales de reserva se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño establecida en el artículo 129 de dicho ordenamiento, que se debe justificar de la siguiente manera:

1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.
2. El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda.
3. Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Asimismo, respecto al plazo de reserva, el artículo 125 de la Ley de la materia, establece que la información clasificada como reservada según el artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. Por otra parte, señala que los documentos reservados serán desclasificados cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo establecido, exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o bien el Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación o se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o actos de corrupción.

Conforme a lo anterior, para el caso que de existan auditorías en trámite, el Sujeto Obligado, a través de su Comité de Transparencia, deberá emitir el Acuerdo mediante el cual se confirme la clasificación de manera fundada y motivada, mediante la realización de la prueba de daño establecida en los Lineamientos Generales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Finalmente, para el caso de que los documentos que den cuenta de lo solicitado, contengan datos o información clasificada; al respecto, conforme al artículo 3°, fracción XLV, relacionado con el 137, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuando un documento contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender al requerimiento informativo, deberá elaborar una versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Para tal situación, el Sujeto Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de dicho ordenamiento jurídico; esto es, que el área competente deberá elaborar la versión pública, así como emitir el Acuerdo, por parte del Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los datos, fundando y motivando la clasificación.

**SEXTO. Decisión**

Con fundamento en el artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta otorgada por la Secretaría de Finanzas, a efecto de que asuma competencia y entregue la información solicitada, en el caso que se haya generado

**Términos de la Resolución para conocimiento del Particular**

Se le hace del conocimiento al ahora Recurrente que, en el presente asunto, se le da la razón, pues el Sujeto Obligado es competente para conocer de la información solicitada, por lo que estaba en posibilidades de pronunciarse y proporcionar la información que obrara en sus archivos.

Finalmente, se le informa que la labor de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es apoyar a la población a acceder a la información pública y garantizar la protección de los datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **REVOCA** la respuesta entregada por la Secretaría de Finanzas, a las solicitudes de información 00363/SF/IP/2024, 00364/SF/IP/2024 y 00379/SF/IP/2024, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al Ente Recurrido**,** a efecto de que previa búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de las unidades administrativas competentes, entregue a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en su caso en versión pública, el Informe de Auditoría y los documentos mediante los cuales se solventaron o atendieron las observaciones emitidas a las Auditorías realizadas a las siguientes áreas:

* A la Dirección General de Tesorería, y las áreas que la conforman, del cuatro de junio de dos mil veintitrés al cuatro de junio de dos mil veinticuatro, y
* A la Subsecretaría de Tesorería y las áreas que la conforman, del primero de octubre de dos mil veintitrés al treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro.

Además, de ser necesario, deberá proporcionar el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos o información clasificada, en la versión pública, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII y 132, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el supuesto, de que a la fecha de las solicitudes de información se encontrará en trámite alguna de las Auditoría, deberá proporcionar el Acuerdo donde el Comité de Transparencia, confirme la reserva de la información, de de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 129, 132, fracción II, 140, fracción V, numeral 1, y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para el caso, de que no se haya desarrollado alguna auditoría durante los periodos señalados a alguna de las unidades administrativas, deberá hacerlo del conocimiento a la parte Recurrente de manera clara y precisa.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE VÍA SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley referida.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE** **VÍA SAIMEX** al Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA CON VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.